



Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general
10 de julio de 2014
Español
Original: inglés

Comité de los Derechos del Niño 61º período de sesiones

Acta resumida de la 1742ª sesión

Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el jueves 27 de septiembre de 2012, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zermatten

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes (*continuación*)

Informes periódicos tercero y cuarto del Canadá (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único, que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-46248 (EXT)



* 1 2 4 6 2 4 8 *

Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)

Informes periódicos tercero y cuarto del Canadá (continuación) (CRC/C/CAN/3-4; CRC/C/CAN/Q/3-4 y Add.1)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación del Canadá toma asiento a la Mesa del Comité.*
2. **La Sra. Bossé** (Canadá), en respuesta a las preguntas formuladas en la sesión anterior, dice que el Gobierno federal revisa periódicamente todos los programas en fase de ejecución a fin de asegurarse de que no han perdido relevancia y están funcionando eficazmente. Si procede, se estudian formas alternativas de obtener los resultados apetecibles. Las evaluaciones, que son supervisadas por un comité de evaluación y auditoría, dan a conocer a los ministros, viceministros y organismos centrales las enseñanzas extraídas y las buenas prácticas, y se completan con planes de acción en lo tocante a la gestión.
3. **La Sra. Harty** (Canadá) indica que las estrategias de reducción de la pobreza se elaboran y aplican a escala provincial. Las autoridades de ese nivel tienen jurisdicción sobre dicho ámbito y existen variaciones significativas entre las circunstancias económicas y sociales de cada provincia. A nivel federal, el enfoque adoptado por el Gobierno para promover el bienestar de los niños y las familias integra las necesidades de los niños de una amplia serie de estamentos sociales, que viven en diferentes estructuras familiares, por lo que hace a la seguridad económica. Ese planteamiento se combina con estrategias de lucha contra la pobreza y apoyo al mercado laboral en las provincias y territorios y resulta sostenible, porque muchas prestaciones están cubiertas por la legislación, incluida la prestación universal para el cuidado de los hijos y el Servicio de Transferencia canadiense en materia de programas sociales. El enfoque del Gobierno federal está concebido para los niños que más lo necesitan, respetando al propio tiempo los principios de universalidad e igualdad.
4. En 2011 y 2012, el Gobierno federal aportó más de 15.000 millones de dólares canadienses para respaldar el desarrollo de la primera infancia, la primera etapa de aprendizaje y la asistencia al niño, mediante aportaciones directas y medidas fiscales para las familias con hijos. Junto a los 1.200 millones de dólares canadienses asignados a las provincias y territorios a través del Servicio de Transferencia canadiense en materia de programas sociales, representa la inversión más cuantiosa del Gobierno federal en el desarrollo de la primera infancia y la atención al niño de la historia del país.
5. El sistema fiscal y de transferencias se caracteriza por una orientación marcadamente redistributiva; dos tercios de todas las prestaciones van a parar a las familias más necesitadas, mientras que las personas que perciben un ingreso del quintil superior solo reciben el 6,5% del total. Gracias a las inversiones e iniciativas se ha logrado evitar que muchos niños vivan en una situación de pobreza. Como se indica en el párrafo 104 de las respuestas escritas del Gobierno del Canadá (CRC/C/CAN/Q/3-4/Add.1), la prestación por hijos a cargo ha evitado que, según las estimaciones, unos 171.100 niños pertenecientes a 78.800 familias subsistieran en 2005 con unos ingresos reducidos. El progreso se evalúa utilizando varios indicadores, que reflejan, en conjunto, el éxito del país en la lucha contra la pobreza infantil.
6. Si bien las prestaciones se asignan sobre la base de los ingresos, el origen étnico se tiene también cuenta al evaluar el alcance de las mismas desde una perspectiva socioeconómica. En el análisis de las cuestiones de política y en la elaboración de programas adecuados se toman en consideración las circunstancias particulares de los

grupos vulnerables y, entre ellas, las de las minorías étnicas. Los responsables de la planificación aprovechan el importante volumen de estudios gubernamentales y no gubernamentales acerca de la situación de varios grupos inmigrantes en el mercado de trabajo, para afrontar los obstáculos culturales y lingüísticos y la discriminación de que son objeto muchos inmigrantes al llegar al Canadá.

7. Con objeto de abordar el desafío que suponen los costes de la atención a los hijos para las familias de bajos ingresos, el Gobierno está aplicando un Plan Universal para el cuidado infantil, que incluye una transferencia mensual a las familias con hijos pequeños y un programa destinado a ampliar el número de espacios dedicados a la atención de los niños en todo el país. Además, la prestación vinculada al impuesto sobre la renta complementa los ingresos de las familias trabajadoras de escasos recursos y contribuye a garantizar la mejora de la situación económica de las familias que reciben asistencia social, gracias al trabajo. En 2009, hubo 110.000 personas, pertenecientes a 47.000 familias, que pudieron salir de su situación de bajos ingresos. Hasta la fecha, tres provincias y un territorio han incorporado esa prestación en sus programas sociales, asegurando al propio tiempo la compatibilidad con los principios nacionales. El Gobierno ha puesto en marcha también una iniciativa destinada a incrementar la participación de los indígenas en el mercado laboral, mediante el apoyo prestado por los servicios de cuidados infantiles a los niños de las Primeras Naciones e inuit, cuyos padres están iniciando un nuevo trabajo o participando en un programa de formación.

8. El aumento de casi el 10% registrado entre 1995 y 2004 en la desigualdad de los ingresos disponibles después de pagar los impuestos es un reflejo del incremento del nivel económico obtenido por el 1% de la población de mayores ingresos, más que de una disminución de la redistribución a través del sistema de impuestos y transferencias. De hecho, ese sistema ha amortiguado los efectos de la reciente recesión. Los informes internacionales no son a veces muy exactos, porque no abarcan la amplia gama de inversiones efectuadas por todas las jurisdicciones canadienses. El Gobierno está trabajando con las organizaciones competentes a fin de elaborar un método seguro y fiable que supondrá una mejora frente a los informes anteriores, como el informe de 2008 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), titulado "Growing Unequal?", cuya metodología ha puesto el Gobierno en tela de juicio. Una buena vara de medir el éxito del Canadá en su lucha contra la pobreza y por la promoción de la igualdad para todos son los resultados de la movilidad social. Según las conclusiones del informe de 2010 de la OCDE titulado "Going for Growth", la movilidad social intergeneracional en una serie de países y, entre ellos, el Canadá, es superior a la registrada en otros Estados miembros de la OCDE. Es bastante probable que los niños canadienses puedan alcanzar una situación socioeconómica más elevada que la de sus padres, debido en gran parte al descenso de las tasas de pobreza y al respaldo educativo recibido en los diferentes niveles.

9. **La Sra. McCarthy** (Canadá) dice que, para combatir la pobreza infantil en Quebec, se están invirtiendo unos 1.200 millones de dólares, con arreglo al Plan de Acción Gubernamental para la Solidaridad y la Integración Social, en forma de créditos fiscales abonados directamente a los padres, con pagos suplementarios destinados a las familias de los niños con discapacidad. Las familias más pobres tienen acceso a guarderías gratuitas y reciben dinero en efectivo para adquirir el material escolar al comienzo de cada curso. En 2010, más de 52.000 niños en Quebec se acogieron a esa ayuda.

10. **La Sra. Harty** (Canadá) señala que el Gobierno no ha ratificado el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 (Nº 138), fundamentalmente porque afecta a cuestiones que son de la competencia provincial y territorial. El Gobierno federal debe ponerse de acuerdo con los gobiernos provinciales y territoriales antes de poder ratificar esos instrumentos. El tema se planteó en septiembre de 2012 con motivo de una reunión de los ministerios de trabajo pertinentes y

en la actualidad se está estudiando la posibilidad de su ratificación. No obstante, ya se están aplicando los principales principios consagrados en la Convención, dado que todas las jurisdicciones canadienses cuentan con leyes en vigor para proteger a los niños de la explotación económica y los trabajos peligrosos.

11. **La Sra. Bossé** (Canadá) dice que el Plan Nacional de Acción en favor de los niños, *Por un Canadá apto para los niños*, estableció una serie de principios rectores relativos al desarrollo de la primera infancia, como se explica en la carpeta de documentos distribuida a los miembros del Comité.

12. **La Sra. Langlois** (Canadá) indica que todas las provincias y territorios disponen de programas de salud maternoinfantil, que incluyen visitas a domicilio y servicios especializados para niños y familias vulnerables. El Gobierno federal apoya esa labor mediante su Programa de acción comunitaria para los niños y el Programa canadiense de nutrición prenatal. También se presta ayuda a nivel provincial a las madres adolescentes. En Quebec, los servicios integrados para el desarrollo de la primera infancia están dirigidos a las familias con progenitores menores de 20 años. La cobertura de los programas de salud maternoinfantil se extiende a casi el 40% de las comunidades de las Primeras Naciones asentadas en las reservas, en donde las visitas a los domicilios familiares corren a cargo de personal parasanitario capacitado, que pertenece, en su mayoría, a la comunidad a la que atienden.

13. **La Sra. Maurás Pérez** (Relatora para el país) pregunta cómo garantiza el Estado parte la coordinación de las medidas adoptadas de conformidad con el Plan Nacional de Acción en favor de los niños, con las destinadas a promover y proteger los derechos de los niños en todos los sectores y provincias. El Comité agradecería recibir más información sobre la aplicación del Plan y, lo que es más importante, sobre cómo se evalúa su impacto. Convendría saber si el Plan seguirá aplicándose en el futuro y si se actualizará con nuevos objetivos establecidos en colaboración con los niños y la sociedad civil.

14. **La Sra. Bossé** (Canadá), en respuesta a una pregunta sobre la salud mental y el suicidio, dice que la nueva estrategia en la esfera de la salud mental cubre todos los sectores, desde la promoción hasta el apoyo a las personas que padecen trastornos psiquiátricos. Actualmente se están fomentando las buenas prácticas en todo el país y se están tomando disposiciones en ciertas comunidades para combatir las causas primordiales del suicidio.

15. Se ha elaborado un marco de acción sobre el peso sano, junto con las autoridades sanitarias federales, provinciales y territoriales. Abarca 21 actuaciones iniciales, de las que dos están dirigidas a sensibilizar a la población respecto de las ventajas de la lactancia materna y a alentar a las empresas alimentarias a comercializar alimentos saludables para los niños.

16. **La Sra. Harty** (Canadá) señala que, en el año 2000, los gobiernos federales, provinciales y territoriales acordaron informar anualmente sobre las mejoras y la ampliación de los programas y servicios de desarrollo de la primera infancia. Por consiguiente, los diferentes niveles de gobierno presentan informes periódicos sobre el bienestar de los niños en todo el país, utilizando una serie de 11 indicadores; el último informe se publicó en junio de 2012. Los informes se nutren de la información recogida en una base de datos que refleja las actividades federales, provinciales y territoriales, así como las inversiones en el desarrollo de la primera infancia, el aprendizaje temprano y los cuidados infantiles. Los datos relativos a la educación de la primera infancia correspondientes al período de 1992 a 2008 están disponibles en los informes de la Dependencia de recursos e investigación sobre la atención al niño. Las tres jurisdicciones han formado un grupo de trabajo conjunto con miras a estudiar la mejor manera de coordinar las actividades y compartir los datos, a fin de darlos a conocer a nivel nacional.

El gobierno de Quebec forma parte de ese grupo en calidad de observador, ya que cuenta con su propio proceso para compartir los datos con los residentes de Quebec.

17. **La Sra. Fillion** (Canadá) dice que, en el derecho penal canadiense, la agresión se define, en términos generales, como el uso no consensual de la fuerza contra otra persona. El artículo 43 del Código Penal brinda una defensa a los padres, cuidadores y maestros, que de lo contrario, podrían ser declarados culpables de agresión en el caso de que recurrieran al uso de una fuerza de baja intensidad para corregir el comportamiento de los niños, como por ejemplo, para calmar a un niño con una rabieta o administrar un ligero azote. El Tribunal Supremo defendió en 2004 la constitucionalidad de esa disposición. Adoptó directrices para la utilización de una fuerza correctiva leve, de carácter transitorio y sin importancia, que provoque escaso dolor, por no decir ninguno y que no deje marcas en la piel del niño. El artículo 43 del Código Penal no tolera ni autoriza el maltrato de los niños.

18. Cualquier tipo de conducta, ya sea de naturaleza correctiva o de otra índole, que genere la necesidad de proteger a un niño, será objeto de la intervención del Estado, en virtud de lo dispuesto en las legislaciones territorial y provincial de protección de la infancia. Si se estima que el niño requiere protección, las autoridades proporcionarán asesoramiento y ayuda a la familia. En los casos más graves, pueden alejar al niño de forma temporal o permanente del hogar familiar, basando esas decisiones en el interés superior del menor. El Gobierno sigue respaldando los programas de la escuela de padres que promueven métodos disciplinarios de orientación positiva y no física.

19. **La Sra. Herczog** (Relatora para el país) pregunta si el Estado parte proyecta aprobar normas legislativas que prohíban taxativamente los castigos corporales. Convendría saber si cabe aplicar también la fuerza leve, considerada aceptable para los niños, a las relaciones entre adultos y, en ese caso, qué relación guarda con la violencia doméstica.

20. La oradora pregunta si la educación de la primera infancia se imparte de forma gratuita a los hijos de las familias que carecen de los recursos necesarios para pagarla. De ser así, agradecería disponer de datos sobre el número de familias que se benefician de esa disposición y sobre el número total de horas de enseñanza preescolar que se imparten en virtud de ese acuerdo.

21. **La Sra. Fillion** (Canadá) dice que no existen planes para derogar el artículo 43 del Código Penal. El empleo de la fuerza que autoriza está justificado por el deber parental de proteger y educar a los niños y tiene un alcance extremadamente limitado. El Gobierno apoya y defiende métodos no físicos de disciplina y fomenta las aptitudes de los padres en ese sentido.

22. **La Sra. McCarthy** (Canadá) explica que el plan para prevenir la violencia doméstica en Quebec prevé la asistencia a las víctimas de la violencia doméstica, ya sean mujeres o niños. Los servicios prestados a las víctimas de la violencia doméstica han experimentado una notable mejoría tras la duplicación de la financiación gubernamental a los albergues, permitiendo a las autoridades ampliar los servicios ofrecidos a los niños víctimas. El plan de acción para 2012-2017 se centrará en proteger la seguridad de las víctimas, incluidos los niños y jóvenes, y en proporcionar tratamiento al miembro violento de la familia.

23. **La Sra. Ducros** (Canadá) dice que el Encuentro histórico de la Corona y las Primeras Naciones, celebrado en enero de 2012, demostró que el Gobierno había convertido las cuestiones indígenas en una prioridad. Sin embargo, pese a haber invertido, en 2010 y 2011, unos 1.800 millones de dólares canadienses en la enseñanza de las comunidades de las Primeras Naciones, el Gobierno no ha logrado subsanar las lagunas detectadas en los resultados educativos de los niños indígenas. Varias auditorías y estudios independientes han formulado recomendaciones sustantivas sobre gobernanza, idiomas y culturas, rendición de cuentas y financiación. El Gobierno está teniendo presente esas

recomendaciones para introducir las reformas necesarias en la educación de las Primeras Naciones. Se ha desarrollado un nuevo sistema de información en materia de educación, que facilita el proceso de verificar los resultados y medir el rendimiento. El Gobierno se ha propuesto también aprobar en 2014 una ley de educación para las Primeras Naciones, con objeto de diseñar las estructuras y las normas imprescindibles destinadas a respaldar en las reservas unos sistemas educativos de alto nivel, dotados de transparencia. En 2012, el Gobierno anunció que se asignarían 100 millones de dólares canadienses más, a lo largo de tres años, a fin de poner en marcha un nuevo sistema de educación para las Primeras Naciones. Se han destinado otros 175 millones de dólares canadienses adicionales, distribuidos en tres años, para la construcción y renovación de las escuelas en las reservas.

24. En respuesta a una pregunta sobre el predominio de niños indígenas en las modalidades de asistencia a la infancia, la oradora señala que se han aplicado varias medidas para mejorar la prestación de servicios a los niños y a las familias en las reservas. Las provincias han reformado sus programas de bienestar infantil, con objeto de adoptar un enfoque de carácter más preventivo, y las autoridades federales han hecho lo propio a través de acuerdos de asociación con las Primeras Naciones y las provincias. El método mejorado, centrado en la prevención, ha sentado las bases indispensables para que los niños puedan permanecer en el seno familiar, gracias a actividades como las escuelas de padres y la ayuda a domicilio. Ofrece también la flexibilidad imprescindible para garantizar la disponibilidad de servicios de prevención a los niños y las familias en situación de riesgo, antes de que se imponga la necesidad de protegerlos. Las autoridades están brindando en la actualidad una cobertura al 70% aproximadamente de los niños y familias de las Primeras Naciones que viven en las reservas en todo el país. Los primeros indicios muestran un incremento del número de familias que utilizan los servicios centrados en la prevención, el número de colocaciones permanentes de niños y la utilización de cuidados a cargo de los parientes.

25. El Gobierno es consciente de la importancia de recopilar datos estadísticos de buena calidad a fin de respaldar la elaboración de políticas y programas. Ya se ha puesto en marcha la cuarta generación de encuestas sobre los pueblos indígenas, que incluye preguntas sobre el desarrollo de la primera infancia y se ha elaborado un Índice de bienestar comunitario, a fin de medir la calidad de vida de las comunidades de las Primeras Naciones e inuit en relación con otras comunidades. Se han actualizado las proyecciones para la población india registrada, a partir de datos recientes y de investigaciones. Esas proyecciones son un instrumento importante para la planificación de la educación, los servicios destinados a la familia, las infraestructuras, la atención de salud y otros servicios comunitarios.

26. El impacto y la relevancia de la programación destinada a los indígenas se mide por varias fuentes de datos que utilizan los principios de gestión basada en los resultados. Desde 2007, ha habido cuatro auditorías y dos evaluaciones del Programa de servicios a la infancia y la familia de las Primeras Naciones, dos de las cuales han sido efectuadas por la Auditoría General. Las conclusiones han servido para introducir mejoras y formular orientaciones destinadas a los futuros programas. En junio de 2011, la Auditoría General indicó que el Departamento de Asuntos Indios y del Norte del Canadá atendió correctamente las recomendaciones de 2008 en el sentido de que debería determinar cuál era el coste total de satisfacer los requisitos de política del Programa de servicios a la infancia y la familia de las Primeras Naciones y revisar periódicamente el presupuesto del programa.

27. Se ha adoptado el planteamiento de otorgar prioridad al niño por lo que hace a la educación, la salud y los programas sociales, con objeto de garantizar que, en el caso de un conflicto de competencias, los niños de las Primeras Naciones con discapacidades múltiples seguirán beneficiándose de los servicios basados en la normativa de asistencia establecida

por la provincia. El Gobierno se ha reunido con representantes de las 10 provincias, que en su mayoría, indicaron que disponían de suficientes mecanismos para atender las controversias jurisdiccionales. Desde 2008, todos los casos se han resuelto a través de los cauces existentes y ninguno alcanzó el nivel de conflicto jurisdiccional declarado.

28. A fin de modificar las disposiciones de la Ley de asuntos indios, que discrimina a las mujeres y niños indígenas y, en especial, a su derecho a contraer matrimonio, poseer bienes raíces y heredar tierras de las reservas, el Gobierno aprobó en enero de 2011 la Ley de igualdad de género en el registro civil indio. Gracias a esas modificaciones, se ha logrado que pudieran inscribirse en el registro los nietos de las mujeres que habían perdido su condición de indias por haberse casado con hombres no indios y que reunían los requisitos necesarios. Según las estimaciones, tienen derecho ahora a inscribirse en el registro unas 45.000 personas, que podrán acogerse a los programas y servicios de que disponen todos los indios registrados. Además, en septiembre de 2011, el Gobierno presentó en la Cámara de los Comunes el proyecto de ley S-2, la futura ley de viviendas familiares en las reservas y de intereses o derechos matrimoniales. La finalidad del proyecto consiste en otorgar derechos básicos y protección a las personas que mantienen relaciones en las reservas, en lo tocante al hogar familiar y otros intereses o derechos matrimoniales en caso de ruptura o de fallecimiento de uno de los cónyuges o de un miembro de la pareja de hecho.

29. Canadá ha tomado medidas importantes para perpetuar las culturas y tradiciones indígenas, mediante la organización de actos anuales como el Día Nacional de los Indígenas y el Encuentro histórico de la Corona y las Primeras Naciones. Aunque la Convención no se ha traducido a las lenguas indígenas, las autoridades fomentan activamente el conocimiento de la Convención entre dichas poblaciones. En 2011, se tradujo al inuktitut el conjunto promocional de documentos para el Día Nacional del Niño.

30. **La Sra. Irish** (Canadá) dice que, en virtud de la Ley de inmigración y protección de los refugiados, es preciso nombrar un representante específico para cada menor de edad en cualquier procedimiento de la Junta de Inmigración y de los Refugiados. Lo habitual es que ese representante sea uno de los padres del niño, pero si se trata de un menor de edad no acompañado o si la Junta tiene dudas acerca de la idoneidad del progenitor que actúa como representante, deberá designar a un representante independiente. El papel del representante nombrado consiste en actuar en aras del interés superior del niño durante la tramitación del procedimiento en la Junta y no debe confundirse con el de un tutor con arreglo a la ley provincial o territorial.

31. **La Sra. Sandberg** pregunta por qué no se les asigna a los menores no acompañados un representante legal. Tiene entendido que, en virtud de la Ley de protección del régimen de inmigración del Canadá, que en breve entrará en vigor, según se espera, un niño de 16 o 17 años de nacionalidad extranjera puede ser detenido hasta que no se revisen las razones de su detención. Además, de conformidad con la información recibida por el Comité, los niños y las niñas no están separados en los lugares de detención. La oradora pregunta por qué no se hace así.

32. **El Sr. Kotrane** dice que, según el párrafo 33 de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre los informes periódicos combinados sexto y séptimo del Canadá a dicho órgano (CEDAW/C/CAN/CO/7), las adolescentes a menudo están recluidas en centros mixtos donde están expuestas a la violencia por parte de detenidos adolescentes o de guardias varones. El orador pregunta si las condiciones siguen siendo las mismas.

33. Pide a la delegación que comente el párrafo 175 de las respuestas escritas del Estado parte a la lista de cuestiones (CRC/C/CAN/Q/Add.1), en el que se indica que, a raíz de la adopción del proyecto de ley C-10, el Ministro de Justicia de Quebec accedió a fijar en

16 años la edad mínima para dictar una sentencia de adultos, pese a la presunción, inherente a la Convención, de que los niños deben recibir un trato diferente al de los adultos.

34. **El Sr. Gastaud** pregunta si existen suficientes establecimientos penitenciarios para hacer efectiva la prohibición, recogida en el proyecto de ley, de mantener detenidos juntos a los adultos y los niños. Tras señalar a la atención el dato estadístico de que el promedio de duración del período de detención es de seis días, pregunta a qué grupos de edad se aplica. Desea saber si los niños cuentan con tribunales especiales.

35. **La Sra. Wijemanne** señala que se ha informado al Comité de que un 40% al menos de la mortalidad de los menores de 5 años en el Canadá se registra entre las familias de las Primeras Naciones. Desea saber si el programa de extensión sanitaria destinado a las familias incluye una estrategia para conectar con las que se hallan en situación de riesgo. Se pregunta también si, dadas las altas tasas de obesidad infantil en el Canadá, el Gobierno ha tomado medidas a fin de controlar la comercialización de comida rápida para los niños. Pregunta qué se está haciendo para luchar contra el uso excesivo de sustancias psicotrópicas en vez de tratamientos no médicos, para abordar los trastornos psicosociales y emocionales de los niños.

36. **La Sra. Varmah** dice que, a pesar del compromiso asumido por el Estado parte de mejorar el estado de salud de la población canadiense, no todos comparten el nivel de salud, relativamente elevado, del país. Los niños indígenas, en particular, muestran tasas comparativamente altas de enfermedades respiratorias, obesidad y consumo excesivo de sustancias. Dada la epidemia de obesidad, se pregunta qué medidas se han tomado para fomentar buenos hábitos alimentarios y la práctica del ejercicio físico.

37. **El Sr. Madi**, tras observar que los niños nacidos en el extranjero, hijos de padres canadienses que también habían nacido en el extranjero, no tienen derecho automáticamente a la nacionalidad canadiense, expresa su preocupación por el hecho de que los niños que no reúnen las condiciones para acceder a la nacionalidad canadiense puedan convertirse en apátridas.

38. **La Sra. Herczog** pregunta si existe una legislación en el Canadá que prohíba los castigos corporales en la prisión, de qué alternativas a la suspensión disponen las escuelas y si los centros escolares afrocéntricos no constituyen una forma de segregación. Pasando al tema de los solicitantes de asilo, observa que alrededor de 80.000 inmigrantes romaníes que no están considerados refugiados políticos están solicitando asilo en el Canadá. Pregunta cómo trata el Estado parte los casos de niños romaníes asentados en el Canadá y que correrían un elevado riesgo de persecución si fueran devueltos a Hungría.

39. **La Sra. Nores de García** indica que ninguno de los enfoques aplicados por el Estado parte para medir los niveles de pobreza se centra como es debido en la población africanocanadiense o en la indígena. Pregunta si se dispone de un plan global para luchar contra la pobreza en esos grupos de la población.

Se suspende la sesión a las 11.20 horas y se reanuda a las 11.35 horas.

40. **La Sra. Bossé** (Canadá) dice que, en virtud del Plan Nacional de Acción en favor de la infancia, las provincias definen sus propias políticas y programas, con el apoyo prestado por el Gobierno. No existe en la actualidad ningún informe sobre el nivel de aplicación del Plan de Acción.

41. **La Sra. Langlois** (Canadá), en respuesta a una pregunta sobre los programas de salud maternoinfantil, señala que, para mejorar la coordinación, el gobierno del Canadá ha adoptado un enfoque de gestión por grupos para esos programas. El presupuesto anual para el módulo de programas de salud maternoinfantil asciende a un total de 172.000 millones de dólares canadienses, con un suplemento de 200 millones para el grupo de programas de

salud mental y de lucha contra las adicciones. Las comunidades pueden utilizar esos fondos para desarrollar programas adaptados a las necesidades locales.

42. **La Sra. Bossé** (Canadá) indica que las tasas de obesidad infantil se han mantenido estables en el Canadá desde 2004. El Marco federal-provincial-territorial de acción para promover un peso saludable se ha centrado en fomentar un entorno sano, una intervención precoz y la supervisión del progreso a nivel nacional. El Gobierno alienta a los fabricantes de alimentos a aprobar voluntariamente métodos de comercialización responsables; cada provincia puede decidir si adopta o no un enfoque regulador al respecto.

43. **La Sra. Irish** (Canadá) dice que un menor de edad no acompañado puede tener tanto un tutor como un representante a los efectos de tramitar la solicitud de asilo. Cuando el bienestar de un niño corre peligro, se previene a las autoridades provinciales, independientemente de que el niño esté acompañado o no.

44. La finalidad de las disposiciones en materia de detención de la Ley de protección del régimen de inmigración del Canadá reside en poder aplicarse en determinadas circunstancias, como en los casos de trata de personas. Los niños menores de 16 años no pueden ser objeto de una orden de detención, y el interés superior del niño debe servir de principio rector. Si bien se puede privar de libertad a niños de 16 y de 17 años, es preciso también aplicar ese mismo principio rector. En ciertas situaciones, un niño puede recuperar su libertad, con las excepciones previstas en las facultades discrecionales ministeriales.

45. Los niños nacidos fuera del Canadá, hijos de padres que también nacieron en el extranjero, tienen la posibilidad de obtener la residencia permanente si sus progenitores regresan al país, pudiendo solicitar ulteriormente la nacionalidad. Si los niños son apátridas, es posible concederles la nacionalidad tras un período de residencia de tres años en el Canadá.

46. Los inmigrantes de Hungría son efectivamente el grupo más nutrido de solicitantes de asilo en el Canadá; son tratados en pie de igualdad con otros solicitantes y recientemente se ha acelerado el examen de todas las solicitudes de asilo.

47. **La Sra. Harty** (Canadá) está de acuerdo en que los instrumentos utilizados para comparar países, como el estudio de la OCDE ya citado, no revelan necesariamente gran cosa acerca de la distribución de los ingresos entre la población del país. En cuanto a la pobreza de los africanos e indígenas canadienses, explica que dos tercios de todas las prestaciones concedidas a los niños en el Canadá van a parar a las familias de bajos ingresos y, como existe una correlación entre los bajos ingresos y el origen étnico, los dos grupos que responden a esas características son los que reciben más ayuda. Dada la distribución de los diferentes grupos de población por todo el país, las provincias y municipios pueden elaborar programas adaptados a las necesidades concretas de los sectores de su competencia. Además, algunos programas destinados a la población en general poseen también un componente específico que sirve para satisfacer las necesidades de los niños indígenas.

48. **La Sra. Fillion** (Canadá) indica que, en virtud de las disposiciones de la Ley modificada de la justicia juvenil, todos los niños infractores son juzgados en tribunales de menores. En determinadas circunstancias, sin embargo, los jueces pueden dictar sentencias para adultos, como en los casos de delitos graves, como el asesinato, el homicidio o la agresión con agravantes. Sobre el fiscal recae la tarea de demostrar la necesidad de una sentencia para adultos. Las solicitudes de aplicación de sentencias para adultos se presentan en función de los casos, y el ministerio fiscal se limita a informar al tribunal de que no tiene intención de solicitar esa medida. En cuanto a la detención de menores de edad, dice que, a menos que un juez determine que no obedece al interés superior del niño o que pondría en peligro su seguridad, los menores de edad permanecen detenidos en instalaciones de custodia juvenil.

49. **El Presidente** pregunta si los infractores reincidentes mayores de 16 años, cumplen las mismas condenas que los adultos, ya que el Comité opina que los niños deben ser tratados como niños. ¿Es posible, por ejemplo, que un niño sea condenado a 20 años de prisión por asesinato, o se han adoptado disposiciones para reducir a la mitad las sentencias para adultos impuestas a los niños, independientemente de la gravedad del delito?

50. **La Sra. Sandberg** pregunta si se dictan también sentencias para adultos en el caso de infractores del grupo de 14 a 16 años de edad. Pregunta hasta qué punto el proyecto C-10 se ajusta a las disposiciones de la Convención, ya que exigir al fiscal que solicite sanciones para adultos si se trata de un menor constituirá un paso atrás.

51. **La Sra. Fillion** (Canadá) aclara que es posible dictar efectivamente sentencias para adultos en el caso de niños de 14 años o más. La cuestión entra dentro de las competencias de los territorios y provincias, que pueden decidir elevar el límite de edad. No está prevista una reducción del 50% en las sentencias para adultos impuestas a los niños.

52. No se toleran los castigos corporales en las instalaciones penitenciarias y ciertas provincias han adoptado, de hecho, normas al respecto, que establecen que no se podrá utilizar la fuerza contra los menores bajo custodia o solo en última instancia. Una vez más, es preciso mencionar que esas cuestiones son de la competencia de las provincias. En cuanto a la relación entre el castigo corporal y la violencia doméstica y la posibilidad de que permitir el empleo de una fuerza correctiva leve equivalga a tolerar el maltrato doméstico, la oradora insiste en que ese no es el caso. El Código Penal enumera una serie de delitos por los que se puede enjuiciar a un maltratador. Además, en los casos de violencia doméstica, las disposiciones del Código Penal estipulan que el maltrato de una esposa o de un niño constituye una circunstancia agravante que deberá tenerse en cuenta a la hora de dictar sentencia.

53. **El Presidente** pregunta si los niños y las niñas están detenidos juntos.

54. **La Sra. McCarthy** (Canadá), en referencia a la situación de Quebec, dice que los jóvenes y las jóvenes están detenidos por separado, aunque se organizan algunas actividades conjuntas, como las comidas y deportes compartidos. El Estado parte ya ha presentado al Comité contra la Tortura las cifras correspondientes a las otras provincias.

55. **La Sra. Golberg** (Canadá) declara que el Estado parte considera que no tiene obligaciones extraterritoriales en virtud del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Los derechos de los niños constituyen una prioridad en el ámbito de la política exterior y de las iniciativas de asistencia al desarrollo del Canadá. En la esfera de la asistencia internacional, el Canadá ha incrementado entre 2007 y 2011 su asistencia oficial al desarrollo como porcentaje del producto nacional bruto. Ha cumplido su promesa de duplicar su asistencia internacional en general y su asistencia a África en particular. El Canadá proyecta seguir dando ejemplo, haciendo mayor hincapié en los países en donde puede tener un auténtico impacto. La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional es el único donante bilateral que asigna inversiones destinadas específicamente a los niños y, en los últimos años, no ha dejado de aumentar el gasto que dedica a los niños y los jóvenes.

56. El Canadá está tomando medidas para abordar el cambio climático en todos los frentes. El cambio climático figura en los planes de estudios escolares de todas las provincias y territorios y el mensaje se refuerza a través de la labor de los municipios, museos, centros científicos, fundaciones de defensa del medio ambiente y organizaciones no gubernamentales.

57. En lo tocante a la responsabilidad social de las empresas, la oradora señala que el Canadá opina que la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos en los Estados extranjeros en los que operan las empresas multinacionales canadienses recae sobre

dichos Estados. Refiriéndose en concreto al tema del amianto, pone de relieve que el Canadá es parte en el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, por lo que es preferible debatir en ese contexto las cuestiones relacionadas con ese producto. No obstante, el Gobierno canadiense alienta a las empresas de su país y espera que todas ellas respeten las leyes y normas internacionales aplicables, funcionen de forma transparente y colaboren con las comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas y actúen de una forma social y ambientalmente responsable. Al propio tiempo, el Canadá no está obligado por ningún tratado a proporcionar un recurso civil interno por las actividades empresariales desarrolladas fuera del territorio canadiense. Las iniciativas voluntarias, incluidos los mecanismos de solución de controversias, representan un enfoque mucho más eficaz del problema.

58. Pasando al tema de las armas pequeñas y ligeras, la Sra. Golberg dice que el Canadá controla estrechamente la exportación de equipos y tecnologías militares a los países en situación de conflicto o bajo la amenaza de hostilidades, o a los que han sido objeto de sanciones por parte las Naciones Unidas o con un historial de violaciones de los derechos humanos.

59. En cuanto al Protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, indica que el Canadá se ha comprometido a desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de resultados concretos a la hora de abordar ese fenómeno, tanto en las Naciones Unidas como sobre el terreno y de apoyar la rehabilitación de los niños víctimas, incluidos los que han sido obligados a cometer delitos. Las fuerzas armadas canadienses no despliegan a menores de 18 años en sectores en que hayan estallado hostilidades; la edad mínima de reclutamiento voluntario es de 17 años para los programas y de 16 para la educación y capacitación en una de las dos Reales Academias Militares y se requiere la autorización de uno de los padres o representantes legales para los candidatos menores de 18 años. El reclutamiento de niños para servir como niños soldados es un delito tipificado en el Código Penal del Canadá y la Ley de 2000 sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra lo ha convertido en un delito extraterritorial. El castigo máximo para todos los crímenes de guerra es la cadena perpetua. Los delitos extraterritoriales se limitan a los establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no comprenden el reclutamiento de personas de 16 a 18 años, de conformidad con el consenso internacional y las obligaciones jurídicas del Estado parte, dado que el Protocolo facultativo no exige la aplicación extraterritorial del derecho penal.

60. Por lo que hace a la detención de menores de edad en Afganistán por parte de las fuerzas canadienses, la oradora señala que la misión de combate del Canadá en ese país finalizó en julio de 2011. La responsabilidad primordial de velar por el respeto de los derechos de los detenidos puestos a disposición de las autoridades afganas recae sobre el Gobierno de Afganistán. Las fuerzas armadas canadienses trataron a todos los detenidos que aparentaban tener menos de 18 años como menores de edad y acataron unas instrucciones muy claras para extremar el cuidado con ellos. Esos jóvenes fueron puestos a disposición de la autoridad afgana competente cuando suponían una amenaza para los efectivos canadienses, afganos o sus aliados. Las disposiciones para el traslado de los detenidos se ajustaron a la normativa internacional, a la legislación afgana y a los procedimientos operativos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y los jóvenes privados de libertad estuvieron recluidos en instalaciones especiales establecidas por la ley afgana. El Gobierno del Canadá llevó a cabo visitas de seguimiento tras el traslado, sin previo aviso, y también a los centros de detención de menores de edad. No se recibió ninguna queja durante las misiones de supervisión o en las entrevistas privadas acerca del tratamiento de esos jóvenes bajo custodia canadiense.

61. En lo tocante al caso concreto del Sr. Khadr, que va a ser trasladado del centro de detención de la bahía de Guantánamo al Canadá, la Sra. Golberg dice que existe un tratado en vigor firmado por el Canadá y los Estados Unidos para las solicitudes de traslado. En virtud de dicho tratado, la decisión corresponde al Ministro de Seguridad Pública. Se ha recibido una solicitud para trasladar al Sr. Khadr al Canadá y se tomará una decisión con arreglo a la ley canadiense. No puede hacer más comentarios sobre ese caso concreto.

62. **La Sra. Lee** sugiere que el Estado parte podría plantearse la posibilidad de descartar activamente a más niños vulnerables o a los que pertenecen a comunidades indígenas para su reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas.

63. **La Sra. Golberg** (Canadá) indica que el Gobierno trata de dirigir sus iniciativas de reclutamiento hacia una amplia gama de canadienses, que sean un reflejo de la composición social y étnica de la sociedad canadiense. Transmitirá, no obstante, la sugerencia del Comité a las autoridades competentes.

64. **El Sr. Kotrane** dice que, dado que el Canadá es un posible país de origen, tránsito y destino de una serie de delitos enunciados en el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, agradecería más información sobre la definición de niño. En el informe periódico se cifra a menudo en 16 años la mayoría de edad, lo que suscita preocupación, habida cuenta de que la mayoría de edad se ha fijado en 18 años tanto en la Convención como en el Protocolo facultativo.

65. Pide que se le aclare si la legislación canadiense recoge delitos como el trabajo forzoso de los niños y la facilitación de adopciones ilegales como la venta de niños, y pregunta qué sanciones se imponen en tales casos. Solicita asimismo más información sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ejemplos de las disposiciones legislativas pertinentes. Tras tomar nota de que el Estado parte reconoce la jurisdicción canadiense sobre los delitos cometidos en el extranjero relacionados con el turismo sexual, pregunta si ello se aplica a otros delitos enumerados en el Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

66. **El Sr. Koompraphant** pregunta cómo funciona la cooperación entre el gran número de órganos de protección de los niños y de las víctimas en el Canadá y qué entidad se encarga de la coordinación general de los esfuerzos en ese sector. Desea saber también qué entidad centra su labor en las iniciativas referentes al Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y cómo cooperan las fuerzas del orden con los servicios de bienestar infantil y el sistema de justicia para sincronizar las actividades de protección.

67. Pregunta qué entidad se encarga de ayudar a los niños víctimas en los procedimientos judiciales, qué medidas se toman a fin de garantizar que se oiga la voz del niño y quién se ocupa de informar al niño del veredicto y de sus implicaciones. Agradecería recibir información sobre la responsabilidad de los padres, en particular en los casos de abandono, y sobre cualquier disposición en vigor para respaldar la integración social o, si fuera necesario, la repatriación de los niños víctimas.

68. **La Sra. Sandberg** observa que se han recibido denuncias de las organizaciones de la sociedad civil que afirman que los esfuerzos para prevenir la explotación sexual de los niños son ineficaces. Se pregunta, por tanto, qué correlación existe entre las medidas positivas mencionadas en el informe del Estado parte y la situación real sobre el terreno, en especial por lo que hace a los niños indígenas. Al Comité le ha llegado también la información de que muchos delincuentes sexuales condenados no constan en el registro correspondiente. Pregunta si ello es así y, en tal caso, qué medidas está tomando el Estado parte al respecto. Pide, por último, una aclaración sobre una cuestión relacionada con la administración de la justicia juvenil: en las respuestas escritas del Estado parte, se indica que el proyecto de ley C-10 mejorará la situación de los menores de edad, pero el Comité

ha sido informado de que, según ese proyecto, el fiscal habrá de estudiar la posibilidad de solicitar una sentencia para adultos.

69. **La Sra. Lee** pregunta qué legislación se aplica a los delitos enunciados en el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Desea saber también si la industria turística del Canadá promueve activamente el Código de Conducta para la protección de los niños contra la explotación sexual en los viajes y el turismo.

70. Pasando al tema de los niños y el conflicto armado, pide al Estado parte que aclare su decisión de dejar de utilizar la designación de "niños soldados" para referirse a ciertos países en los que se dan casos de terrorismo.

71. **La Sra. Aidoo** elogia los esfuerzos del Estado parte para combatir el turismo sexual y sus iniciativas de sensibilización, pero expresa su preocupación por la aplicación efectiva de la legislación pertinente en vigor. Pregunta si se puede enjuiciar a las empresas y compañías que promueven el turismo sexual y qué medidas está adoptando el Estado parte en su territorio y en las misiones canadienses en el exterior, con miras a reforzar la aplicación de la legislación relativa a los canadienses en el extranjero. Además, ¿qué hace el Estado parte para apoyar la rehabilitación de los niños víctimas del turismo sexual, a través de la cooperación internacional, como se recomienda en el Protocolo facultativo?

72. **La Sra. Varmah** solicita información sobre el acceso de los niños vulnerables a los servicios jurídicos, ya que en los informes se mencionan las dificultades en esa esfera, principalmente por la falta de recursos financieros. Los niños no pueden incoar procedimientos civiles sin la autorización de sus representantes legales y, en una serie de provincias, los que desean iniciar una acción civil no tienen acceso a asesoramiento jurídico gratuito, que solo se suele ofrecer, no a las personas, sino a las instituciones. Pregunta si el Estado parte está contemplando la posibilidad de brindar asistencia jurídica gratuita a los niños que, de otra manera, no podrían permitírsela, si se pueden presentar demandas civiles contra las instituciones y las personas y si los niños pueden reclamar una indemnización.

73. **La Sra. Wijemanne** señala a la atención las estadísticas que figuran en el informe inicial sobre la aplicación del Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/CAN/1) acerca del número de incidentes o de casos relacionados con la utilización de niños en la pornografía y solicita información respecto de cualquier investigación o acción judicial emprendida en relación con esos incidentes.

74. **El Sr. Pollar** pide información sobre la situación del Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y su aplicación a nivel nacional y extraterritorial.

75. En cuanto al Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, señala que el Comité ha recibido una información que indica que los niños no estaban lo suficientemente informados antes de firmar los contratos de reclutamiento. Agradecería cualquier información de la delegación al respecto.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.